

JDO. DE LO SOCIAL N. 7
MURCIA

SENTENCIA: 00271/2013

**JUZGADO DE LO SOCIAL 7
MURCIA**

Nº AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000894 /2011

DEMANDANTE/S: [REDACTED]

DEMANDADO/S: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
[REDACTED], [REDACTED], S.A.

En la ciudad de MURCIA, a veinticinco de junio de dos mil trece.

El iltmo. Sr. Don JOSE MANUEL BERMEJO MEDINA, Magistrado del Juzgado de lo Social nº007 de MURCIA, tras haber visto los presentes autos sobre **SEGURIDAD SOCIAL** promovidos como demandante por [REDACTED] contra [REDACTED], asistida por María José Orenes, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y [REDACTED], S.A.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 271/2013

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 31/10/2011 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social demanda interpuesta por el actor en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, termina suplicando se dicte en su día sentencia por la que se dé lugar a sus pretensiones.



SEGUNDO.- Que admitida la demanda a trámite y señalado día y hora para la celebración del acto del Juicio, en su caso, éste tuvo lugar el día y hora señalados; abierto el acto y dada cuenta, por la parte actora se ratificó en su demanda, contestando la demandada según consta, practicándose las pruebas propuestas y admitidas por S.S^a., reiterando en trámite de conclusiones sus respectivas peticiones, quedando el juicio visto para sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación de los presentes autos se han seguido las reglas de procedimiento.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El actor [REDACTED] ha venido prestando sus servicios desde el 28/2/2007 por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada "[REDACTED], S.A.", con la categoría profesional de Oficial 1^a y con una base de cotización que en abril de 2011 ascendió a 2.104'61 €.

SEGUNDO.- La empresa demandada tiene concertada la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes de sus trabajadores con la mutua codemandada "[REDACTED].

TERCERO.- El 30/5/2011 el actor causó baja médica por enfermedad común e inició proceso de incapacidad temporal.

CUARTO.- El demandante padece meniscopatía degenerativa de rodilla derecha, gastritis en tratamiento, litiasis renal, escoliosis lumbar con rotación de campos vertebrales y discopatía degenerativa L5-S1 con protrusión discal global.

QUINTO.- La empresa demandada despidió al trabajador demandante mediante carta de 2/8/2011, redactada como sigue:

"Estimado Sr. Simón:



Una vez concluido el expediente contradictorio que le fue incoado en fecha 25 de julio de 2011, en cuyo curso ha efectuado Ud. las alegaciones que ha estimado oportunas, alegaciones que para nada desvirtúan los hechos indicados en dicho expediente, la Dirección de la Empresa ha adoptado la decisión de proceder a su despido disciplinario con efectos del día de hoy, 2 de agosto de 2011, por los hechos que, a continuación, se exponen:

En fecha 27 de mayo de 2011 y encontrándose Ud. desempeñando su puesto de trabajo, en el turno de trabajo de tarde comprendido entre las 14:00 y 22:00 horas, procede a comunicar a su Responsable, D. [REDACTED], que sufre un dolor en su zona lumbar (pinzamiento) y que bajo su criterio esta situación le dificulta el poder continuar realizando su trabajo. Ante dichas manifestaciones por su parte, el citado Responsable procede a trasladar esta situación a la Dirección de la Planta, en concreto a D. [REDACTED], finalizando Ud. su turno de trabajo finalmente a las 22:00 horas. El lunes siguiente, esto es, en fecha 30 de mayo de 2011, Ud. procede a dejar en la garita de seguridad el correspondiente parte médico de baja por enfermedad común.

Como UD. bien sabe, hasta la presente fecha Ud. refleja un significativo historial de bajas médicas, historial que se le detalla a continuación:

| Tipo de contingencia | Fecha Inicio IT | Fecha fin IT |
|----------------------|-----------------|--------------|
| Enfermedad | 30/05/2011 | |
| Enfermedad | 18/01/2011 | 21/01/2011 |
| Accidente Laboral | 12/07/2010 | 16/07/2010 |
| Accidente Laboral | 11/06/2010 | 09/07/2010 |
| Accidente Laboral | 18/01/2010 | 29/01/2010 |
| Accidente Laboral | 22/07/2009 | 27/07/2009 |
| Enfermedad | 09/03/2009 | 13/03/2009 |
| Enfermedad | 28/02/2008 | 17/10/2008 |
| Recaída Accidente | 22/11/2007 | 18/12/2007 |
| Accidente Laboral | 05/09/2007 | 11/10/2007 |
| Enfermedad | 14/06/2005 | 01/07/2005 |
| Accidente Laboral | 15/06/2004 | 28/10/2004 |
| Accidente Laboral | 24/09/2003 | 24/10/2003 |
| Enfermedad | 04/06/2003 | 13/06/2003 |
| Accidente Laboral | 18/03/2003 | 28/03/2003 |
| Accidente Laboral | 10/09/2002 | 13/09/2002 |
| Accidente Laboral | 14/06/2001 | 25/06/2001 |

A la vista de este amplio historial de absentismo, la Dirección de la Empresa se ha visto en la obligación de efectuar una comprobación de su último proceso de baja, pudiendo verificar finalmente cómo durante los días y horas indicados a continuación, Ud. ha llevado a cabo actividades



físicas incompatibles absolutamente con la situación médica que Ud. manifestó padecer como son:

- Día 06/06/2011: Encontrándose Ud. en la Empresa "[REDACTED]", situada en el Camino Castillo de Jumilla y en torno a las 10:04 horas, procede a introducir en un vehículo, marca Opel Astra y matrícula [REDACTED], un listón de mármol que en ese momento portaba en sus manos. Asimismo y desde las 15:40 y hasta las 15:50 horas permanece dentro de un bar denominado "Chiki", en el que estuvo tornando varias consumiciones y acompañado a su vez por otra persona.

- Día 15/06/2011: Encontrándose Ud. en una nave anexa a una casa de campo denominada "[REDACTED]" y ubicada en la Carretera de [REDACTED], en el tramo horario comprendido entre las 09:54 y las 10:27 horas, Ud. procede a efectuar una serie de manipulaciones en el vehículo radicado con anterioridad, consistente en tratar de retirar la moqueta del maletero de dicho vehículo, llegando a emplear incluso un destornillador, así como procede a pasar la aspiradora por los asientos traseros y delanteros de dicho vehículo. Durante todo ese tiempo Ud. se agacha y se levanta con total normalidad en numerosas ocasiones.

Acto seguido y en el tramo horario comprendido entre las 10:28 y las 10:30 horas, Ud. procede a regar con una manguera una zona de la finca indicada en el párrafo anterior.

Asimismo y en torno a las 18:10 horas y en la misma finca, Ud. se encuentra portando en sus manos un capazo.

- Día 16/06/2011; Entre las 09:18 y las 09:39 horas así como entre las 15:20 y las 15:29 horas permanece Ud. en el bar "[REDACTED]". Asimismo y habiendo llegado Ud. en torno a las 15:37 horas a la misma nave que se indica en los párrafos anteriores, procede a efectuar ciertas manipulaciones en el maletero del vehículo señalado con anterioridad, permaneciendo agachado desde las 15:48 hasta las 15:57 horas. Igualmente en la misma zona geográfica y tras introducir una botella de agua en la parte izquierda trasera del vehículo, permanece agachado durante 4 minutos, esto es, desde las 18:14 a las 18:18 horas.

- Día 17/06/2011; Encontrándose Ud. en la nave anexa a la vivienda indicada con anterioridad, en torno a las 09:19 horas procede Ud. a agacharse para coger un objeto de suelo y lo cambia de lugar.



Al margen de los hechos concretos descritos con anterioridad, y durante los días 4, 6, 15, 16 y 17 de junio de los corrientes, se ha podido comprobar cómo Ud. lleva a cabo una vida diaria que refleja una absoluta normalidad, tal y como Ud. mismo lo reconoce expresamente en su propio escrito de alegaciones, entrando y saliendo del indicado vehículo en numerosas ocasiones y de forma frecuente así como conduciendo el mismo sin ningún tipo de problema físico por su parte. Se ha podido comprobar así mismo como Ud. ha adoptado constantes posturas físicas muy forzadas en su zona lumbar y que para nada reflejan ningún tipo de limitación de carácter físico, sino al contrario evidencian una condición física por su parte perfectamente habilitante para el desarrollo de su puesto de trabajo.

Los hechos anteriormente descritos y en los que en resumen Ud. realiza constantes actividades físicas que para nada son compatibles con la situación médica que Ud. manifiesta padecer y que en todo caso dificultan o prolongan indebidamente su proceso médico de recuperación, constituyen una falta laboral muy grave consistente en una simulación de enfermedad y una prolongación de la baja por enfermedad con la finalidad de realizar cualquier trabajo, así como un fraude, deslealtad o abuso de confianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3, apartados c) y d) del Acuerdo de cobertura de vacíos, aprobado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de mayo de 1997, de aplicación en la Empresa conforme a la remisión expresa que existe en materia disciplinaria en el Convenio Colectivo, así como en el artículo 54.2, apartado d) del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se procede a extinguir su contrato por despido disciplinario ya anunciado al comienzo de este escrito, con efectos del día de hoy.

Igualmente, se le informa de que de este escrito se entrega copia al Comité de Empresa y a la Sección Sindical de [REDACTED], a los que también se les dio traslado del expediente contradictorio abierto para que efectuasen las oportunas alegaciones, y ello a los efectos legalmente procedentes".

SEXTO.- La mutua codemandada acordó suspender con efectos desde el 2/8/2011 el derecho al subsidio de incapacidad temporal que venía percibiendo el actor, mediante comunicación escrita de 12/8/2011, redactada en los siguientes términos:

"Le comunicamos que esta Mutua ha acordado, en el ejercicio de la facultad que tiene reconocida en el artículo 80,1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, suspender su derecho al subsidio de incapacidad temporal, al haber comprobado que Vd. realiza actividades incompatibles con dicha situación, lo que perjudica su



proceso de curación, prolongando indebidamente la percepción del subsidio y supone un mantenimiento en el percibo de la prestación en fraude de ley.

Son de aplicación los artículos 128.1 y 132.1.a) y b) y 132.2, de la Ley General de la Seguridad Social, así como el artículo 6.4. del Código Civil.

Todo ello sin perjuicio del reintegro de las prestaciones que pudiera haber percibido indebidamente, que le serían reclamadas en su caso por esta Entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio y 90.1 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Contra este acuerdo podrá formular, en el plazo de treinta días, reclamación previa ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.2 de la Ley de Procedimiento Laboral".

SEPTIMO.- El trabajador impugnó judicialmente el despido disciplinario mediante demanda que fue turnada al Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia (autos nº 750/2011). El 21/12/2011 el actor y la empresa demandada celebraron conciliación judicial, en la que acordaron lo siguiente:

"La empresa reconoce la improcedencia del despido con efectos de 2-8-2011 sin devengo de salarios de tramitación, y ofrece al trabajador en concepto de indemnización la cantidad neta de 30.000 euros que se hará efectiva mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente donde habitualmente el trabajador percibía sus salarios, antes del próximo día 26-12-2011.

Por el trabajador se acepta el ofrecimiento y forma de pago en todos sus términos y condiciones y declara que al haber percibido con anterioridad a esta fecha la liquidación de haberes que le correspondía a la fecha del despido (2-8-2011) con el buen fin de la transferencia anterior, se considera totalmente saldado y finiquitado de la relación laboral que ha venido manteniendo con la empresa demandada hasta el 2-8-2011, y en consecuencia no tiene nada mas que reclamar por ningún concepto ni cuantía derivado de la relación laboral extinguida, renunciando, por tanto, a cualquier reclamación extrajudicial, administrativa o judicial ante cualquier jurisdicción, incluida la penal, contra la empresa demandada, sus socios, administradores o



cualesquiera trabajadores que tuvieran su origen o causa en la relación laboral extinguida.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo, el/la Secretario/a Judicial, doy fe".

OCTAVO.- Se ha agotado la vía administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el art. 97.2 LPL debe decirse que los anteriores hechos han sido declarados probados merced a los documentos aportados.

El trabajador demandante impugna en autos el acuerdo adoptado por la mutua demandada el 12/8/2011, por el que suspende el derecho de aquél al subsidio de incapacidad temporal con efectos desde el 2/8/2011. Argumenta que no ha existido actuación fraudulenta por su parte, que la resolución impugnada le causa indefensión, que no ha realizado ninguna actividad incompatible que perjudique su situación, y que, caso de que sí la hubiera realizado, ello no admitiría "mayor sanción que la suspensión del subsidio por un plazo máximo de 3 meses".

Empezando por este último asunto planteado, es decir, si cabe que la mutua imponga la suspensión del derecho por plazo que exceda de 3 meses, teniendo en cuenta que en este caso el acuerdo impugnado suspende el subsidio de I.T. desde el 2/8/2011 pero sin ponerle plazo a la suspensión, cabe citar la STSJ Cataluña/Sala de lo Social de 14/5/2007, que declara lo siguiente:

"Hemos de recordar sobre este particular, que el art. 132.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece que el derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido en estos dos supuestos: a) cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación. b) cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.

El problema reside en que esta norma no detalla cuál de aquellas consecuencias jurídicas, denegación, anulación o suspensión, corresponde a cada una de estas situaciones



dispare, y en su caso, cuál habría de ser la duración del período de suspensión aplicable.

Lo que hace necesario interpretar este precepto con criterios lógico-jurídicos y en armonía con el conjunto de la normativa reguladora de la contingencia de incapacidad temporal, para evitar la inseguridad que podría generarse en la aplicación de un artículo redactado con tal amplitud y tan escasa precisión.

Interpretación que no puede ser otra que la de diferenciar entre aquellas situaciones en las que se comprueba la falta de elementos constitutivos del derecho al subsidio, bien sea originaria o por desaparición sobrevenida, y aquellos otros en los que concurren todos los requisitos exigibles para el nacimiento del derecho a la prestación, pero el beneficiario ha llevado a cabo actos incompatibles con la situación de baja médica, como sucede con la realización de trabajos que no revelan la recuperación del normal estado de capacidad laboral, pero sí comprometen la evolución favorable del proceso curativo.

En el primer supuesto, una vez constatado que no concurren los elementos constitutivos del derecho por haber actuado el beneficiario fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, o bien, cuando la realización de trabajos por cuenta propia o ajena revele inequívocamente que la situación de incapacidad médica es inexistente, es admisible que se proceda a la denegación de la prestación o en su caso a la anulación de la ya concedida, en la medida en que se comprueba que no concurren los requisitos exigibles para devengarla, o bien, que tales requisitos con posterioridad han desaparecido.

En el segundo supuesto en cambio, la única medida coherente que cabe adoptar para reprimirla es la suspensión del subsidio, porque no se trata de que no concurren los requisitos necesarios para lucrar la prestación, o de que hayan desaparecido, sino de que el beneficiario ha realizado actos que comprometen la normal recuperación de las dolencias que motivan la baja médica. En estas situaciones se mantiene la necesidad de tratamiento médico porque el trabajador aún no se ha recuperado de sus lesiones, pero con su irregular actuación está interfiriendo en su curación.

Llegados a este punto, nos encontramos con que la Ley General de la Seguridad Social no determina durante cuánto tiempo se puede suspender la efectividad del derecho de cobro, lo que obliga a poner en conexión el citado art.



132.1º con lo previsto al respecto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tanto en el art. 25.1º del texto refundido vigente, como en el art. 17.1º de la anterior Ley 8/1988, que resulta de aplicación al caso de autos. Preceptos en los que se califica de infracción grave el hecho de efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, siempre que exista incompatibilidad, legal o reglamentariamente establecida; conducta que el anterior art. 46.1.2 y el actual 47.1º b) sancionan con pérdida de la prestación o pensión durante un período de tres meses, limitando de forma expresa la posibilidad de extinción de la prestación a los otros supuestos contemplados en aquellos preceptos y excluyéndola por tanto, en los casos en los que la conducta del beneficiario se limite al simple hecho de realizar trabajos por cuenta propia o ajena.

De lo que se desprende, que el mero hecho de trabajar en situación de incapacidad temporal - cuando de ello no resultan elementos de juicio que impongan la conclusión de que haya sobrevenido una circunstancia que suponga la inexistencia de condiciones para mantener la prestación-, no admite mayor sanción que la suspensión del subsidio por plazo máximo de tres meses...Lo que nos lleva a estimar el recurso para declarar que debe anularse la sanción impuesta por la Mutua de Accidentes. Esta, de considerarlo oportuno, y si no concurren otros obstáculos, podrá dirigirse al INSS para que por parte de la Gestora se inicie el oportuno expediente en el que, con respeto a todas las garantías, se adopte la resolución que resulte pertinente a la vista de cuanto resulte acreditado respecto a la actuación del beneficiario".

Por su parte, el TSJ/Sala de lo Social Castilla-León (sede Valladolid), en sentencia de 16/12/2009, establece lo que sigue:

"Ciertamente es doctrina unificada, que se cita en sentencia, la que señala que de entre las facultades de extinción, denegación, anulación o suspensión del subsidio de IT que se contemplan en los arts. 131 bis y 132 LGSS, únicamente carece la Matep de toda posibilidad de extinguir el subsidio o suspender su percepción por tiempo superior al del trabajo, en el concreto supuesto de actividad laboral por cuenta propia o ajena realizada por el beneficiario; medidas que únicamente puede adoptar la Entidad Gestora [art. 48.4 LISOS], que ha de ejercitarla en el oportuno procedimiento sancionador [arts. 51 y siguientes LISOS). Como tampoco se extiende -la competencia de la Mutua- a decidir la causa extintiva cuya apreciación comporta valorar clínicamente la situación existente [alta médica], y que en la actualidad está atribuida a los facultativos del Servicio Público de Salud [art. 1.4 RD



575/97, al no haber tenido desarrollo reglamentario la previsión de atribuírsele -también- a las Mutuas de Accidente [art. 44 del RD Ley 6/2000]. Como señala la STS de 9 de octubre de 2006, "si es claro que tal entidad colaboradora no puede imponer sanción alguna [nos remitimos nuevamente al art. 48.4 LISOS], ciertamente no merecería tal reproche aquella medida que se limitase a ser reflejo de los presupuestos propios de la contingencia y no comportase esencia punitiva alguna; en otras palabras, si la contingencia de IT ampara la pérdida de ingresos por limitación psicofísica que impide el ejercicio de la actividad laboral [art. 128 LGSS.], aunque el trabajo por cuenta propia o ajena no presupone ineluctablemente la curación del beneficiario, en todo caso evidencia la innecesariedad de la renta sustitutiva del salario o ingreso, con lo que solamente resultaría sancionadora aquella medida [anulación; suspensión] que excediese temporalmente de la actividad laboral acreditada; o lo que es igual, la paridad en la ecuación trabajo/suspensión podría servir de módulo diferenciador entre la mera gestión y la actividad punitiva, de forma que la coincidencia de extensión temporal entre el hecho y la decisión adoptada [tantos días de suspensión como de actividad laboral] determinaría la calificación de la medida como acto de gestión, en tanto que el exceso [en términos de suspensión por más tiempo; o anulación del derecho] comportaría vedada sanción para la Mutua, cuya posibilidad de actuación -fuera de aquellos parámetros de equivalencia temporal- se limitaría a las actuaciones previstas en los arts. 80 RD 1993/95 ["podrán instar la actuación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en los términos que se reconoce a las empresas"] y 5 RD 575/97 [cuando "consideren que el trabajador, puede no estar impedido para el trabajo, podrán formular... propuestas motivadas de alta médica], porque la actividad laboral resulta -al menos en apariencia- manifestación de una capacidad para el trabajo que contradice la propia existencia legal de la IT".

Aplicada la anterior doctrina al caso de autos, resulta que el acuerdo impugnado en el litigio no es ajustado a derecho, pues si la mutua estima que el actor realizaba actividades incompatibles con la situación de incapacidad temporal, perjudicando el proceso de curación, prolongado indebidamente la percepción del subsidio y manteniendo la prestación de forma fraudulenta, podía haber solicitado del Instituto Nacional de la Seguridad Social la apertura de un expediente sancionador por fraude, pues solo tenía la posibilidad de suspender la percepción del subsidio de I.T. durante el tiempo en que hubiese durado la supuesta actividad del actor (no concretada en la resolución combatida en demanda), mas no de suspender "sine die" con efectos, no desde que empezó a realizarse la actividad supuestamente fraudulenta, sino desde la fecha de la carta de despido disciplinario, la prestación que venía percibiendo el trabajador en incapacidad temporal.



SEGUNDO.- Por otra parte, la mutua demandada procedió a suspender la prestación de I.T. con efectos desde el 2/8/2011, limitándose a consignar como causa de la suspensión el que el actor "realiza actividades incompatibles con dicha situación, lo que perjudica su proceso de curación, prolongando indebidamente la percepción del subsidio y supone un mantenimiento en el percibo de la prestación en fraude de ley", todo ello de conformidad con los arts. 128.1, 132.1 a) y b) y 132.2 LGSS y 6.4 C. Civil.

Al no existir dato médico alguno que avalara la situación de capacidad del actor, que la mutua pudo conseguir mediante la cita a éste a reconocimiento médico, la suspensión se fundamenta en la supuesta constancia de una actividad incompatible con la situación de I.T. El defecto que se observa es la falta de toda concreción sobre tal hecho. La mutua no indica en qué consisten tales "actividades incompatibles", lugar en que se realizan, ni días concretos o periodo de tiempo en que se hayan producido las actividades en cuestión.

Según se constata en las actuaciones, la entidad colaboradora decidió suspender el subsidio de I.T. al conocer que la empresa había despedido al trabajador por haber realizado actividades físicas incompatibles con la baja médica durante los días 6, 15, 16 y 17 de junio de 2011. Sin embargo, también se ha acreditado en juicio que en acto de conciliación judicial celebrado el 21/12/2011 la empresa reconoció la improcedencia del despido o, lo que es lo mismo, admitió lo ilícito de su decisión al despedir al actor por el motivo apuntado.

En el curso del juicio tampoco ha resultado acreditada ninguna actividad física desarrollada por el trabajador incompatible con su situación de incapacidad temporal.

Para poder valorar la conducta supuestamente fraudulenta observada por el actor, y que mereció la suspensión del subsidio de I.T. por acuerdo de la mutua, resulta imprescindible conocer la índole de la enfermedad o dolencia causante de la baja médica para así, en atención a las características de la actividad realizada por el actor, concluir si era o no susceptible de perturbar la curación de éste. Pues bien, en este caso falta la premisa de la que parte la mutua para adoptar el acuerdo de suspensión, pues en todo momento considera que la patología causante del proceso de I.T. es una lumbalgia. Sin embargo, en el único parte de baja aportado al litigio (documento núm. 52 del ramo de prueba de la mutua), no consta la patología objeto



de diagnóstico, teniendo en cuenta que el trabajador padece otras dolencias disparejas, además de las que derivan de su dolencia en la columna lumbar.

A la vista de todo ello, puede concluirse que la actuación de la mutua, que no se ha limitado a suspender el abono del subsidio durante aquellos días en que hubiera probado la actividad del demandante, única actuación que, según la doctrina jurisprudencial, puede considerarse en puridad acto de gestión permitido a la entidad colaboradora, sino que ha procedido a suspender *sine die* el subsidio de I.T., realizando una actuación propiamente sancionadora que le está vedada, sin vinculación alguna entre la actividad supuestamente fraudulenta y la dolencia no acreditada causante de la baja médica, sin que se haya acreditado ninguna conducta fraudulenta del actor ni la realización de actividades médicamente contraindicadas, procede la estimación de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que **estimando** la demanda formulada por [REDACTED] contra [REDACTED], el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y [REDACTED], S.A., declaro la nulidad de la suspensión de prestaciones por incapacidad temporal acordada por la mutua en resolución de 12/8/2011, por lo que condeno a ésta a abonar al accionante el correspondiente subsidio desde el 2/8/2011 con arreglo a una base reguladora mensual de **2.104'61 €**.



.- Notifíquese a las partes con advertencia de que la **SENTENCIA no es firme** y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la **SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA**, que deberá anunciarse dentro de los **CINCO DIAS** siguientes a esta notificación, bastando, para ello, la mera manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar recurso, o por comparecencia o por

escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social.

.- Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del Letrado que ha de interponerlo y que el **recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita** presente en la Secretaría del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier oficina de **BANESTO**, en la "**Cuenta de Depósitos y Consignaciones num. 3403-0000-(65 para recursos de suplicación, 30 para recursos de reposición y 64 para EJECUCIONES) - (cuatro cifras, correspondiente al número de procedimiento) - (dos últimas cifras correspondiente al año del procedimiento)**", abierta a nombre del Juzgado con **C.I.F. S-28136001**, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto del anterior, acreditativo del depósito de **500 euros**.

.- Si el recurrente fuere el **Organismo condenado**, deberá presentar en la Secretaría del Juzgado, **AL ANUNCIAR SU RECURSO, certificación acreditativa de que comienza el abono de la presentación de pago periódico** y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

